

12 December 2019

English only

---

**Eighth session**

Abu Dhabi, 16–20 December 2019

**Statement submitted by the UNCAC Coalition, a  
non-governmental organization not in consultative  
status with the Economic and Social Council**

The following document is being circulated in accordance with paragraph 1 (i) of resolution 4/6 of the Conference of the States Parties to the United Nations Convention against Corruption and rule 17, paragraph 3 (b), of the rules of procedure for the Conference.

The present text is being circulated in English and in any other languages as received by the secretariat.

---



**Hacer que la CNUCC funcione:**  
**Declaración de la UNCAC Coalition ante la 8ª Sesión de la Conferencia de los Estados Partes de la CNUCC**

*La UNCAC Coalition presenta esta declaración para renovar y actualizar su llamado a los Estados Partes de la CNUCC a adoptar resoluciones en la próxima sesión de la Conferencia de Estados Partes de la UNCAC (CEP) para lograr lo siguiente:*

**Sobre la participación de la sociedad civil**

1. Reafirmar la importancia de y el derecho de la sociedad civil a la participación en los esfuerzos de anticorrupción, instar a los Estados Partes a crear y mantener un entorno seguro y propicio para la sociedad civil, y eliminar cualquier impedimento en la ley y en la práctica que limite dicha participación en contra de la letra y el espíritu de la Convención, las normas internacionales de derechos humanos y la Agenda de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible de 2030.
2. Encomendar a la UNODC que desarrolle, en consulta con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y cualquier otra parte interesada, indicadores para medir la participación de la sociedad civil y otros actores no estatales en la implementación de la Convención (Artículos 5 y 13 de la UNCAC).
3. Poner fin a la exclusión de las OSC de los órganos subsidiarios de la CEP (incluido el Mecanismo de Examen) y confirmar su condición de observador, de conformidad con los artículos 2 y 17 del Reglamento de la CEP y las recomendaciones del dictamen de 2010 de la Oficina del Asesor Jurídico, lo que permitirá crear un entorno más propicio para hacer frente a los problemas de corrupción mediante una mayor participación de los agentes no estatales.

**Sobre el proceso de revisión de la CNUCC**

4. Solicitar a la UNODC y al Mecanismo de Examen que preparen una propuesta para continuar el proceso de revisión de la CNUCC más allá del segundo ciclo de examen en curso y que propongan mejoras, incluso asegurando recursos adecuados, la participación de la sociedad civil (Artículo 63(4-7)), y un proceso oficial de seguimiento de las recomendaciones de la revisión de país, con los hallazgos a ser discutidos en la 9ª CEP.
5. Instar a los Estados Partes a que lleven a cabo su proceso de revisión de la CNUCC de manera transparente e inclusiva - en línea con los principios del Compromiso de Transparencia de la UNCAC Coalition, a la que se han comprometido voluntariamente 19 países, incluyendo la publicación de calendarios actualizados de examen de cada país, información de contacto de los puntos focales, documentos claves de examen, incluyendo la lista de verificación de autoevaluación y los informes completos de los países (incluyendo los del primer ciclo de examen), así como la organización de visitas a los países con la participación de la sociedad civil (Artículos 10,13.1, 63).

---

<sup>1</sup> Compromiso de Transparencia y Guía para la Transparencia y Participación en el MIR de la UNCAC: <https://uncaccoalition.org/uncac-review/transparency-pledge/>

## **Sobre la prevención**

6. Instar a los Estados Partes a adoptar e implementar una legislación integral sobre el acceso a la información, otorgando a los ciudadanos el derecho de exigir información de las entidades públicas de acuerdo con la meta 16.10 del ODS, y asegurando la publicación proactiva de información, incluyendo los esfuerzos anticorrupción, el funcionamiento y las actividades de las entidades del Estado y el uso de fondos y recursos públicos, siempre que sea posible en formatos abiertos (Artículos 10 y 13).

7. Exhortar a los Estados Partes a que redoblen sus esfuerzos por aumentar la transparencia de sus procesos de contratación pública, a que introduzcan o mantengan enfoques de contratación abiertos para garantizar el pleno acceso público a la información y a todos los documentos y acuerdos a lo largo de la vida de un contrato, desde la planificación hasta la ejecución (Artículo 9); a que se esfuercen por hacer que la información sobre contrataciones sea fácilmente accesible al público en formatos abiertos y estandarizados, como el esquema mundial de mejores prácticas, la Norma para los Datos de Contratación Abierta, que facilite la continuación de su uso y análisis, incluida la identificación de las señales de alerta sobre la corrupción; a que se disponga de mecanismos de retroinformación inclusivos y de colaboración a lo largo de todo el proceso de adquisición, y a que encomienden a la UNODC de poner al día y de expandir la guía de prácticas recomendadas en la materia de transparencia de las adquisiciones.

8. Insta a los Estados Partes a que velen por que se publique en tiempo real información adecuada, precisa y actualizada sobre las empresas y otras entidades jurídicas, incluidos los funcionarios, directores y propietarios directos, utilizando una norma de datos abierta y registros públicos de empresas en línea que permitan realizar búsquedas gratuitas, a fin de facilitar el acceso de los organismos encargados de hacer cumplir la ley, las instituciones financieras y el público en general.

9. Pedir también la creación de registros públicos a nivel nacional de los beneficiarios finales de empresas, fideicomisos y otras entidades jurídicas, con información oportuna y precisa que sea de libre acceso en línea para los organismos nacionales y extranjeros encargados de hacer cumplir la ley, las autoridades competentes y el público (Artículo 12(2c)); alentar a los Estados Partes a que colaboren en la definición y adopción de un formato común de datos para registrar la información sobre los beneficiarios finales a fin de permitir la interoperabilidad con otros conjuntos de datos y hacer pleno uso de la misma para investigar y detectar los delitos de corrupción, de acuerdo con la Declaración de Oslo de 2019 sobre la corrupción con grandes cantidades de activos; pedir a los gobiernos que recopilen y publiquen la información sobre los beneficiarios finales de todos los oferentes y socios en los contratos del sector público.

10. Exhortar a los Estados Partes a que promulguen y hagan cumplir leyes sobre conflictos de intereses para asegurar una clara separación entre la posición pública y las ganancias privadas. Además, pedir a los Estados Partes que exijan a las personas con funciones públicas prominentes (Personas Expuestas Políticamente) que presenten regularmente declaraciones completas de bienes, que pongan estos datos a disposición del público en formatos abiertos a través de un registro central, que establezcan un mecanismo de vigilancia independiente, así como sanciones en caso de incumplimiento, y que faciliten la verificación a través del intercambio internacional de estos datos (Artículos 8, 14, 43 y 52).

11. De acuerdo con los principios desarrollados por la Reunión del Grupo de Expertos sobre Transparencia en las Finanzas Políticas, celebrada en Praga en mayo de 2019, instar a los Estados Partes a que adopten y apliquen legislación para garantizar una regulación y transparencia adecuadas, así como una supervisión independiente y con recursos suficientes de las finanzas de los partidos políticos, los candidatos y las campañas (Artículo 7.3).

12. Pedir a los Estados Partes que respalden la Declaración de Yakarta sobre los Principios para los Organismos de Lucha contra la Corrupción y que garanticen que los organismos de lucha contra la corrupción cuenten con los recursos adecuados y puedan funcionar eficazmente y sin injerencias indebidas, como se destaca en las Resoluciones 7/2 y 7/5 (Artículos 6 y 36).

### **Sobre la presentación de informes**

13. Reconocer la importancia de la protección de los denunciantes en los sectores público y privado, crear canales de información confidenciales y seguros dentro de las entidades y las autoridades anticorrupción, y proporcionar protección legal adecuada contra las represalias a todos los denunciantes, incluidos los que informan a las OSC y a los medios de comunicación; basándose en la recomendación 53 de la Declaración de Oslo, instar a los Estados Parte a que garanticen que todas las amenazas contra denunciantes, testigos, periodistas y activistas de la sociedad civil implicados en casos de corrupción se tomen en serio y que las autoridades competentes concedan protección y asistencia de manera oportuna, o, cuando proceda, a través de canales internacionales, regionales y bilaterales (Artículos 13 y 33);

### **Sobre la Gran Corrupción, la criminalización y la aplicación de la ley**

14. Pedir a los Estados Partes que reconozcan y tomen medidas eficaces contra el grave delito de gran corrupción, incluyendo la introducción de un delito de gran corrupción (Artículo 16(2)).

15. Garantizar que las personas jurídicas y físicas rindan cuentas por los delitos de corrupción, como se destaca en la Resolución 7/2, al tiempo que se vela por que las medidas de lucha contra la corrupción se ajusten a las normas de derechos humanos, así como a los principios de equidad e igualdad ante la ley, destacados en el preámbulo de la Convención.

### **Sobre los remedios contra la corrupción**

16. Recordar a los Estados Partes que deben tomar medidas efectivas para abordar las consecuencias de la corrupción y asegurar la indemnización de las víctimas, tanto individuales como colectivas (Artículos 32, 34, 35, 53 y 57 de la UNCAC) y alentarlos a avanzar en los esfuerzos de identificación e indemnización de las víctimas en casos de corrupción, compartiendo y promoviendo ejemplos de mejores prácticas.

### **Sobre la recuperación de activos**

17. Instar a los Estados Partes a que tomen medidas inmediatas para cumplir con el compromiso del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.4 de mejorar significativamente la recuperación de activos y el retorno para el año 2030, en particular aumentando el intercambio proactivo y oportuno de información, persiguiendo a los funcionarios corruptos a nivel nacional, y aplicando leyes adecuadas sobre la legitimación procesal (Artículos 53 y

56). Los Estados Partes deberían considerar la admisión de reclamaciones de interés público en relación con la recuperación del producto de la corrupción transferido al extranjero (Artículos 13 y 35).

18. Exhortar a los Estados Partes a que promulguen y apliquen leyes amplias que prevean el decomiso de todo bien obtenido mediante la comisión de un delito tipificado en la Convención o derivado de ella y que permitan la congelación rápida de los bienes que se sospeche que proceden de la comisión de esos delitos (Artículo 3).

19. Pedir a los Estados Partes que garanticen que los activos devueltos de conformidad con la Convención se utilicen, devuelvan y gestionen de conformidad con los Principios para la Disposición y Transferencia de Bienes Confiscados Robados en Casos de Corrupción ("Principios GFAR") y de manera que contribuyan al desarrollo sostenible y a la reparación de los daños causados a las víctimas y a la sociedad; instar a los Estados Partes a que elaboren y apliquen directrices sobre las mejores prácticas en materia de gestión de activos y retorno, que abarquen esos principios.

### **Sobre la Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU (UNGASS) 2021 sobre la corrupción**

20. Asegurar la participación más amplia posible de las OSC en la UNGASS, de conformidad con las directrices del OCHCH sobre el derecho a participar en los asuntos públicos (aprobadas por consenso por el Consejo de Derechos Humanos en su resolución 39/11), incluso concediendo a las organizaciones de la sociedad civil el derecho a observar las reuniones preparatorias y estableciendo un proceso que les permita contribuir al documento final del período de sesiones.

21. Acordar un mecanismo que esté en línea con el ECOSOC 1996/31 y que requiera que cualquier objeción de los Estados Partes a organizaciones específicas se haga por escrito, detallando la objeción, mucho antes de la UNGASS (o de una reunión preparatoria), que las objeciones y todos los materiales relacionados se hagan públicos, dando a la OSC afectada la oportunidad de responder, después de lo cual debe haber una decisión pública sobre la exclusión.

6 de diciembre de 2019

**Faire fonctionner la CNUCC:**  
**Déclaration de la UNCAC Coalition à la 8<sup>e</sup> session de la Conférence des États parties à la CNUCC**

*La UNCAC Coalition soumet la présente déclaration pour renouveler et mettre à jour son appel aux États parties à la CNUCC afin qu'ils adoptent des résolutions à la prochaine session de la Conférence des États parties (CEP) de la CNUCC afin de parvenir à ce qui suit:*

**Sur la participation de la société civile**

1. Réaffirmer l'importance et le droit à la participation de la société civile aux efforts de lutte contre la corruption, appeler les États parties à créer et à maintenir un environnement sûr et propice à la société civile, et éliminer tout obstacle en droit et en pratique qui entrave cette participation, en violation de la lettre et de l'esprit de la Convention, des normes internationales relatives aux droits de l'homme et du Programme des Nations Unies pour le développement durable de 2030.
2. Mandater l'ONUSD à élaborer, en consultation avec les organisations de la société civile (OSC) et toute autre partie intéressée, des indicateurs pour mesurer la participation de la société civile et d'autres acteurs non étatiques à l'application de la Convention (articles 5 et 13 de la CNUCC).
3. Mettre fin à l'exclusion des OSC des organes subsidiaires de la CEP (y compris le GRI) et confirmer leur statut d'observateur conformément aux règles de procédure 2 et 17 de la CEP et aux recommandations de l'avis de 2010 du Bureau du Conseiller juridique, afin de créer un environnement plus propice à la lutte contre la corruption en impliquant davantage des acteurs non étatiques.

**Sur le processus d'examen de la CNUCC**

4. Demander à l'ONUSD et au Mécanisme d'examen de préparer une proposition visant à poursuivre le processus d'examen de la CNUCC au-delà du deuxième cycle d'examen en cours et de proposer des améliorations, notamment en garantissant des ressources adéquates, la participation de la société civile (article 63(4-7)), et un processus officiel de suivi des recommandations issues des examens nationaux, dont les conclusions seront examinées à la 9<sup>ème</sup> CEP.
5. Exhorter les États parties à mener leur processus d'examen de la CNUCC d'une manière transparente et inclusive - conformément aux principes de l'engagement de transparence de la UNCAC Coalition auquel 19 pays se sont volontairement engagés<sup>1</sup> - y compris en publiant des calendriers d'examen actualisés pour chaque pays, les coordonnées des points focaux, les principaux documents d'examen, notamment la liste récapitulative pour l'auto-évaluation, les rapports complets (y compris sur les examens du premier cycle), et à organiser des visites dans les pays avec la participation de la société civile (articles 10, 13.1 et 63).

---

<sup>1</sup> Engagement des États en Faveur de la Transparence ("Transparency Pledge") et le Guide sur la Transparence et la Participation au sein du Mécanisme d'Examen de la CNUCC: <https://uncaccoalition.org/uncac-review/transparency-pledge/>

## Sur la prévention

6. Exhorter les États parties à adopter et à mettre en œuvre une législation globale sur l'accès à l'information, en accordant aux citoyens le droit d'exiger des informations des organismes publics conformément à la cible 16.10 des ODD, et en assurant la publication proactive d'informations, notamment sur les efforts anti-corruption, le fonctionnement et les activités des entités publiques et l'utilisation des fonds et ressources publics, si possible sous forme ouverte (articles 10 et 13).

7. Demander aux États parties de redoubler d'efforts pour accroître la transparence de leurs procédures d'achat et de passation des marchés, d'adopter ou de maintenir des approches ouvertes en matière de passation des marchés pour garantir au public un accès complet à l'information et à tous les documents et accords pendant toute la durée du contrat, de la planification à l'exécution (article 9); s'employer à rendre facilement accessibles au public les informations sur les marchés, sous des formats ouverts et standardisés tels que le schéma mondial des meilleures pratiques pour la passation ouverte des marchés qui facilite une analyse et un usage accrus, en identifiant les alertes à la corruption, mettre au point et à collaborer des mécanismes de rétro-information inclusifs pendant le processus de passation ; l'ONUDC devrait mettre à jour et diffuser le guide des meilleures pratiques concernant la transparence des marchés publics et le diffuser.

8. Prie instamment les États parties de veiller à ce que des informations adéquates, exactes et à jour sur les sociétés et autres personnes morales, y compris les dirigeants, administrateurs et propriétaires directs, soient publiées en temps réel, en utilisant une norme de données ouverte et des registres publics en ligne gratuits et consultables, afin de faciliter l'accès des services répressifs, des institutions financières et du public.

9. Demandent également la création, au niveau national, de registres publics des bénéficiaires effectifs des sociétés, trusts et autres entités juridiques, contenant des informations actualisées et exactes librement accessibles en ligne aux services répressifs, aux autorités compétentes et au public (article 12(2c)) ; encourager les États parties à collaborer à la définition et à l'adoption d'un format de données commun pour enregistrer les informations sur la propriété effective afin de permettre l'interopérabilité avec d'autres ensembles de données et de tirer pleinement parti des enquêtes et de la détection des infractions de corruption, conformément à la Déclaration d'Oslo de 2019 sur la corruption impliquant de grandes quantités de biens ; demander en outre aux gouvernements de rassembler et de publier des informations sur la propriété effective pour tous les soumissionnaires et partenaires des marchés publics.

10. Demander aux États parties d'adopter et d'appliquer des lois sur les conflits d'intérêts afin d'assurer une séparation claire entre la position publique et les gains privés. En outre, exiger des personnes exerçant des fonctions publiques importantes (personnes politiquement exposées) qu'elles déposent régulièrement des déclarations de patrimoine complètes, qu'elles rendent ces données accessibles au public sous une forme ouverte par l'intermédiaire d'un registre central, qu'elles établissent un mécanisme de surveillance indépendant ainsi que des sanctions pour non-respect et qu'elles facilitent la vérification par échange international de ces données (articles 8, 14, 43 et 52).

11. Conformément aux principes élaborés par la réunion du Groupe d'experts sur la transparence du financement politique en mai 2019, exhorter les États parties à adopter et à mettre en œuvre une législation garantissant une réglementation et une transparence adéquate

ainsi qu'un contrôle indépendant et doté de ressources suffisantes des finances des partis politiques, des candidats et des campagnes (article 7.3).

12. Demander aux États parties d'approuver la Déclaration de Jakarta sur les principes applicables aux organismes de lutte contre la corruption et de veiller à ce que les organismes de lutte contre la corruption disposent de ressources suffisantes et puissent fonctionner efficacement et sans ingérence indue, comme indiqué dans les résolutions 7/2 et 7/5 (articles 6 et 36).

### **Au sujet de l'établissement de rapports**

13. Reconnaître l'importance de la protection des dénonciateurs dans les secteurs public et privé, créer des canaux de signalement confidentiels et sûrs au sein des entités et des autorités anticorruption, et offrir des protections juridiques adéquates contre les représailles à tous les dénonciateurs, y compris ceux qui rendent compte aux OSC et aux médias ; sur la base de la recommandation 53 de la Déclaration d'Oslo, prie instamment les États parties de veiller à ce que toutes les menaces contre les dénonciateurs, les témoins, les journalistes et les militants de la société civile impliqués dans des affaires de corruption soient prises au sérieux et que les autorités compétentes ou, le cas échéant, par les voies internationales, régionales et bilatérales (articles 13 et 33) accordent protection et assistance en temps voulu ;

### **Sur la grande corruption, la criminalisation et l'application de la loi**

14. Inviter les États parties à reconnaître et à prendre des mesures efficaces contre le crime grave de grande corruption, y compris l'introduction d'une infraction pénale de grande corruption (article 16(2)).

15. Veiller à ce que les personnes physiques et morales soient tenues responsables des infractions de corruption, comme le souligne la Résolution 7/2, tout en veillant à ce que les mesures de lutte contre la corruption soient conformes aux normes relatives aux droits de l'homme ainsi qu'aux principes d'équité et d'égalité devant la loi, énoncés dans le préambule de la Convention.

### **Sur les recours en cas de corruption**

16. Rappeler aux États parties qu'ils doivent prendre des mesures efficaces pour faire face aux conséquences de la corruption et assurer l'indemnisation des victimes, tant individuelles que collectives (articles 32, 34, 35, 53 et 57 de la CNUCC) et les encourager à faire progresser les efforts d'identification et d'indemnisation des victimes dans les affaires de corruption, en partageant et encourageant les exemples de meilleures pratiques.

### **Sur le recouvrement d'avoirs**

17. Exhorter les États parties à prendre des mesures immédiates pour honorer l'engagement pris dans le cadre de l'objectif de développement durable 16.4 d'améliorer sensiblement le recouvrement et le retour des avoirs d'ici à 2030, en particulier en renforçant le partage proactif et en temps voulu des informations, en poursuivant les fonctionnaires corrompus au niveau national et en appliquant une législation adéquate sur le statut juridique (articles 53 et 56). Les États Parties devraient envisager d'admettre les créances d'intérêt public en relation avec le recouvrement du produit de la corruption transféré à l'étranger (articles 13 et 35).



18. Demander aux États Parties d'adopter et d'appliquer des lois détaillées prévoyant la confiscation de tout bien obtenu par la commission d'une infraction établie par la Convention ou en découlant et permettant le gel rapide des avoirs dont on soupçonne qu'ils proviennent de la commission de ces infractions (article 3).

19. Demander aux États parties de veiller à ce que les avoirs restitués en application de la Convention soient utilisés, restitués et gérés conformément aux Principes pour l'élimination et le transfert des avoirs volés confisqués dans les affaires de corruption (" Principes du GFAR ") et d'une manière propre à contribuer au développement durable et à la réparation du préjudice causé aux victimes et à la société ; exhorter les États parties à élaborer et à appliquer des directives sur les meilleures pratiques en matière de gestion et de restitution des actifs, qui englobent ces principes.

### **Sur la Session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies (UNGASS) 2021 consacrée à la corruption**

20. Assurer la participation la plus large possible des OSC à l'UNGASS - conformément aux directives du HCDH de 2018 sur le droit de participer aux affaires publiques (adoptées par consensus par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 39/11) - notamment en leur accordant le droit d'observer les réunions préparatoires et en établissant un processus qui leur permette de contribuer au document final.

21. Convenir d'un mécanisme conforme au document ECOSOC 1996/31 et exigeant que toute objection des États parties à l'encontre d'organisations spécifiques soit faite par écrit, en détaillant l'objection, bien avant l'UNGASS (ou une réunion préparatoire), que les objections et tous les documents connexes soient rendus publics, donnant aux OSC concernées la possibilité de répondre, puis une décision publique concernant cette exclusion devra être prise.

6 décembre 2019

**Making UNCAC work:  
UNCAC Coalition Statement to the 8<sup>th</sup> Session of the UNCAC Conference of States Parties**

*The UNCAC Coalition submits this statement to renew and update its call on UNCAC States Parties to adopt resolutions at the next session of the UNCAC Conference of States Parties (CoSP) to achieve the following:*

**On civil society participation**

1. Reaffirm the importance of and the right to civil society participation in anti-corruption efforts, call on States Parties to create and maintain a safe and enabling environment for civil society, and eliminate any impediments in law and practice that constrain such participation contrary to the letter and spirit of the Convention, international human rights standards, and the 2030 UN Agenda for Sustainable Development.
2. Mandate UNODC to develop, in consultation with civil society organisations (CSOs) and any other interested parties, indicators to measure the involvement of civil society and other non-state actors in the implementation of the Convention (UNCAC Articles 5 and 13).
3. End the exclusion of CSOs from CoSP subsidiary bodies (including IRG) and confirm their observer status in line with the CoSP Rules of Procedure 2 and 17, and the recommendations of the 2010 opinion of the Office of the Legal Counsel, allowing for a more conducive environment to address corruption challenges through a closer involvement of non-state actors.

**On the UNCAC review process**

4. Request UNODC and the IRG to prepare a proposal to continue the UNCAC review process beyond the ongoing second review cycle and propose improvements, including by ensuring adequate resources, civil society participation (Article 63(4-7)), and an official follow-up process on country review recommendations, with the findings to be discussed at the 9th CoSP.
5. Urge States Parties to conduct their UNCAC review process in a transparent and inclusive manner – in line with the principles of the UNCAC Coalition’s Transparency Pledge to which 19 countries have voluntarily committed<sup>1</sup> – including by publishing updated individual country review timetables, contact information of focal points, key review documents including the self-assessment checklist and full country reports (including on first cycle reviews), and by organising country visits with the participation of civil society (Articles 10, 13.1, 63).

**On prevention**

6. Urge States Parties to adopt and implement comprehensive access to information legislation, granting citizens a right to demand information from public bodies in line with SDG target 16.10, and ensuring the proactive publication of information, including on anti-

---

<sup>1</sup> Transparency Pledge and Guide to Transparency and Participation in the UNCAC IRM:  
<https://uncaccoalition.org/uncac-review/transparency-pledge/>

corruption efforts, the functioning and activities of State entities, and the use of public funds and resources, wherever possible in open formats (Articles 10 and 13).

7. Call on States Parties to strengthen efforts to increase transparency of their procurement and contracting processes, to introduce or maintain open contracting approaches to ensure full public access to information and to all documents and agreements throughout the lifetime of a contract, from planning to implementation (Article 9); strive to make contracting information easily accessible to the public in standardized open formats, such as the global best practice schema Open Contracting Data Standard, that facilitate further use and analysis including identifying corruption red flags; provide inclusive and collaborative feedback mechanisms throughout the procurement process; and task UNODC with updating and expanding the best practice guide on transparency in public procurement.

8. Urges States Parties to ensure that adequate, accurate and current information on corporations and other legal entities, including on officers, directors and direct owners, is published in real-time, using an open data standard and free, searchable, public online corporate registers, in order to facilitate access for law enforcement agencies, financial institutions, and the public.

9. Also call for the creation of national-level public registers of beneficial owners of companies, trusts and other legal entities, with timely and accurate information that is freely accessible online for law enforcement, competent authorities and the public (Article 12(2c)); encourage States Parties to collaborate to define and adopt a common data format to record beneficial ownership information in order to enable interoperability with other data sets and to make full use to investigate and detect corruption offences, in line with the 2019 Oslo Statement on Corruption involving Vast Quantities of Assets; further call for governments to collect and publish beneficial ownership information of all bidders and partners in public sector contracts.

10. Call upon States Parties to enact and enforce conflict of interest laws to ensure clear separation of public position from private gains. Furthermore, require people with prominent public functions (Politically Exposed Persons) to regularly file comprehensive asset declarations, make this data publicly available in open formats through a central registry, establish an independent monitoring mechanism as well as sanctions for non-compliance, and facilitate verification through international exchange of this data (Articles 8, 14, 43 and 52).

11. In line with the principles developed by the Expert Group Meeting on Transparency in Political Finance in May 2019, urge States Parties to adopt and implement legislation to ensure adequate regulation and transparency as well as independent, adequately-resourced oversight of the finances of political parties, candidates and campaigns (Article 7.3).

12. Call on States Parties to endorse the Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies and ensure that anti-corruption bodies are provided with adequate resources and can operate effectively and without any undue interference, as highlighted in Resolutions 7/2 and 7/5 (Articles 6, 36).

### **On reporting**

13. Recognise the importance of whistleblower protection in the public and private sectors, create confidential and secure reporting channels within entities and anti-corruption authorities, and provide adequate legal protections from retribution to all whistleblowers,

including those reporting to CSOs and the media; building on recommendation 53 of the Oslo Statement, urge States Parties to ensure that all threats against whistleblowers, witnesses, journalists and civil society activists involved in pursuing corruption cases be taken seriously and that protection and assistance be granted in a timely manner by relevant authorities, or, where appropriate, through international, regional and bilateral channels (Articles 13 and 33);

### **On Grand Corruption, criminalisation and enforcement**

14. Call on States Parties to recognise and take effective action against the serious crime of grand corruption, including the introduction of a criminal offence of grand corruption (Article 16(2)).

15. Ensure that legal and natural persons are held accountable for corruption offences, as highlighted in Resolution 7/2, while ensuring that anti-corruption enforcement measures comply with human rights standards as well as the principles of fairness and equality before the law, stressed in the Convention's preamble.

### **On remedies for corruption**

16. Remind States Parties that they must take effective measures to address the consequences of corruption and to ensure compensation for victims, both individual and collective (UNCAC Articles 32, 34, 35, 53 and 57) and encourage them to advance efforts on the identification and compensation of victims in corruption cases, including by sharing and promoting best practice examples.

### **On asset recovery**

17. Urge States Parties to take immediate steps towards fulfilling the commitment in Sustainable Development Goal 16.4 to significantly improve asset recovery and return by 2030, in particular by enhancing proactive and timely information sharing, by pursuing corrupt officials domestically, and by implementing adequate laws on legal standing (Articles 53 and 56). States Parties should consider the admission of public interest claims in relation to the recovery of proceeds of corruption transferred abroad (Articles 13 and 35).

18. Call on States Parties to enact and implement comprehensive laws providing for the confiscation of any asset obtained through or derived from the commission of an offence established by the Convention and allowing for quick freezing of assets suspected to be derived from the commission of such offences (Article 3).

19. Call for States Parties to ensure that assets returned pursuant to the Convention are used, returned and managed in line with the Principles for Disposition and Transfer of Confiscated Stolen Assets in Corruption Cases ("GFAR Principles") and in a manner conducive to their contributing to sustainable development and to the reparation of the damage caused to victims and society; urge States Parties to develop and apply guidelines on best practices on asset management and return, which encompass those principles.

### **On the UN General Assembly Special Session (UNGASS) 2021 on corruption**

20. Ensure the broadest possible participation of CSOs in the UNGASS – in line with 2018 OHCHR guidelines on the right to participate in public affairs (adopted by the Human Rights Council in resolution 39/11 by consensus) – including by granting CSOs the right to observe

preparatory meetings and by establishing a process that allows CSOs to contribute towards the session's outcome document.

21. Agree on a mechanism that is in line with ECOSOC 1996/31 and requires that any objections by States Parties to specific organisations shall be made in writing, detailing the objection, well in advance of the UNGASS (or a preparatory meeting), that objections and all related materials shall be made public, providing the affected CSO with an opportunity to respond, after which there should be a public decision on the exclusion.

6 December 2019

## تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:

### بيان تحالف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للجلسة الثامنة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

يقدم تحالف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) هذا البيان بهدف تجديد دعوته للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لاعتماد قرارات في الدورة القادمة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية بغية تحقيق ما يلي:

#### بشأن مشاركة المجتمع المدني

إعادة التأكيد على أهمية مشاركة المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد، ودعوة الدول الأطراف إلى إيجاد بيئة آمنة وتمكينية للمجتمع المدني والمحافظة عليها، وتعيين الحالات المؤسفة التي تكون فيها هذه المشاركة مقيدة بشكل يتعارض مع نص الاتفاقية وروحها، ويتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. كذلك تفويض مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوضع مؤشرات لقياس مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ الاتفاقية، بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني (المادتان 5 و 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد).

منع استبعاد منظمات المجتمع المدني من الهيئات الفرعية التابعة لمؤتمر الدول الأطراف والتأكيد على وضعهم الرقابي في "مجموعة مراجعة التنفيذ" وأي من مجموعات عمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد - وذلك تمشياً مع توصية الرأي القانوني الصادر عام 2010 من مكتب المستشار القانوني ومع المبادئ التوجيهية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لعام 2018 بشأن الحق في المشاركة في الشؤون العامة (التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان في القرار 11/39 بالإجماع) - التدابير والإحكام 2 و 17 لمؤتمر الدول الأطراف - مما يهيئ بيئة شاملة وأكثر فاعلية في التصدي لتحديات الفساد من خلال المشاركة الوثيقة للجهات غير الحكومية. وكذلك مراجعة نهج عدم الاعتراض وفقاً للمادة 17 من النظام الداخلي، لضمان الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة في عملية الموافقة على مشاركة منظمات المجتمع المدني المراقبة والتي لا تتمتع بوضع استشاري داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

#### بشأن عملية مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

اعتماد عملية مراجعة مستمرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بحيث تكون هذه العملية مدعومة بالموارد الكافية، وتضمن مشاركة المجتمع المدني (المادة 63 (4-7))، وتشمل عملية متابعة رسمية لتوصيات المراجعة الوطنية.

حث الدول الأطراف على تنفيذ إجراءات المراجعة لديها وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على نحو يتسم بالشفافية والشمول - تمشياً مع مبادئ "تعهد الشفافية" الصادر عن تحالف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي التزمت بها 19

دولة طواعية 1 - ويشمل ذلك نشر جداول زمنية للمراجعات المحدثة لكل دولة على حدة، ومعلومات التواصل الخاصة بجهات التنسيق، ووثائق المراجعات الرئيسية بما في ذلك قائمة التقييم الذاتي والتقارير الوطنية الشاملة، ومن خلال تنظيم زيارات على الصعيد الوطني بمشاركة المجتمع المدني (المادة 63).

## بشأن الوقاية

حث الدول الأطراف على اعتماد وتنفيذ تشريعات شاملة للوصول إلى المعلومات، ومنح المواطنين حق المعرفة بما يتماشى مع الهدف 10-16 من أهداف التنمية المستدامة، وضمان النشر الاستباقي للمعلومات بما في ذلك المعلومات المتعلقة بجهود مكافحة الفساد، ووظائف وأنشطة مؤسسات الدولة واستخدام الأموال والموارد العامة، كلما كان ذلك ممكناً من خلال صيغ ملفات مفتوحة.

دعوة الدول الأطراف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى زيادة شفافية إجراءات الشراء والتعاقد لديها، وإدخال أو الحفاظ على أساليب تعاقد واضحة لضمان تيسير وصول الجمهور بشكل كامل للمعلومات وجميع الوثائق والاتفاقات طوال مدة العقد بدءاً من التخطيط وحتى التنفيذ (المادة 9)؛ يُضاف إلى ذلك تعزيز الجهود نحو إتاحة معلومات التعاقد للجمهور بسهولة في صيغة ملفات قياسية مفتوحة، مثل مخطط بيانات أفضل الممارسات العالمية "معايير بيانات التعاقد المفتوح"، والتي تسهل تعزيز الاستخدام والتحليل بما في ذلك تحديد إشارات التحذير من الفساد؛ هذا بالإضافة إلى توفير آليات التغذية الراجعة الشاملة والتعاونية طوال عملية الشراء، وتكليف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بإعداد دليل بأفضل الممارسات بشأن الشفافية في المشتريات العمومية.

حث الدول الأطراف على ضمان إصدار معلومات كافية ودقيقة وحديثة عن الشركات والكيانات القانونية الأخرى، ويشمل ذلك ما يتعلق بالموظفين والمديرين والمالكين المباشرين، على أن يكون ذلك في الوقت المطلوب وفي صيغة ملفات مفتوحة - باستخدام المنصات الإلكترونية العامة المجانية والقابلة للبحث فيها- من أجل تسهيل وصول وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية والمؤسسات المالية والكيانات المسؤولة، وكذلك عموم الناس.

الدعوة كذلك إلى إنشاء سجلات عامة على المستوى الوطني للمالكين الحقيقيين للشركات والصناديق والكيانات القانونية الأخرى، مع توافر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب يمكن الوصول إليها مجاناً عبر الإنترنت بالنسبة لجهات إنفاذ القانون المحلية والأجنبية والسلطات المختصة والجمهور (المادة 12 (2 ج))؛ يُضاف إلى ذلك تشجيع الدول الأطراف على التعاون في تحديد واعتماد صيغ بيانات موحدة لتسجيل معلومات الملكية الفعلية من أجل تمكين الربط بين مجموعات البيانات الأخرى

من أجل تحقيق الاستفادة الكاملة بغية التحقق من جرائم الفساد واكتشافها، وكذلك دعوة الحكومات إلى جمع ونشر معلومات الملكية الفعلية لجميع مقدمي العروض والشركاء في عقود القطاع العام.

دعوة الدول الأطراف إلى مطالبة الأشخاص ذوي الوظائف العامة البارزة (أصحاب النفوذ السياسي) بتقديم بيانات شاملة منتظمة عن ممتلكاتهم، وإتاحة هذه البيانات للجمهور في صيغة ملفات مفتوحة من خلال سجل مركزي، وإنشاء آلية رصد مستقلة، وكذلك فرض عقوبات على عدم الامتثال، وتسهيل التحقق من خلال التبادل الدولي لهذه البيانات (المواد 8 و 14 و 43 و 52).

وفي ضوء المبادئ التي وضعها اجتماع فريق الخبراء المعني بالشفافية بشأن التمويل السياسي والمنعقد في براغ في مايو 2019، ينبغي حث الدول الأطراف على اعتماد وتنفيذ تشريعات لضمان التنظيم الملائم والشفافية والرقابة المستقلة والدعومة بشكل جيد للموارد المالية للأحزاب السياسية والمرشحين والحملات (المادة 7.3).

دعوة الدول الأطراف إلى اعتماد بيان جاكرتا بشأن مبادئ وكالات مكافحة الفساد للتأكد من كون هيئات مكافحة الفساد مدعومة بالموارد الكافية وقادرة على العمل بفعالية ودون أي تدخل غير مسوغ على النحو المبين في القرارين 2/7 و 5/7 (المواد 6 و 36).

### بشأن التجريم وإنفاذ القانون

الاعتراف بأهمية حماية المبلغين عن المخالفات في القطاعين العام والخاص، وإنشاء قنوات سرية وآمنة للإبلاغ داخل المؤسسات وسلطات مكافحة الفساد، وتوفير الحماية الكافية لجميع المبلغين عن المخالفات بما في ذلك مقدمي التقارير إلى منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام؛ وبناءً على التوصية 53 من بيان أوصلو في يونيو 2019 بشأن الفساد الذي يتضمن كميات هائلة من الأصول، ينبغي حث الدول الأطراف على ضمان أخذ جميع التهديدات ضد المبلغين عن المخالفات والشهود والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني المشاركين في متابعة قضايا الفساد على محمل الجد، ومنح الحماية والمساعدة في الوقت المناسب من قبل السلطات المعنية، أو متى دعت الحاجة لذلك، من خلال القنوات الدولية والإقليمية والثنائية (المادتان 13 و 33).

دعوة الدول الأطراف إلى الاعتراف بجرائم الفساد الكبرى الخطيرة واتخاذ إجراءات فعالة بشأنها، بما في ذلك وضع تشريعات جنائية لقضايا الفساد الكبرى وممارسة الاختصاصات القضائية عبر الحدود لمقاضاة مرتكبيها عند حدوث إخفاق في التسليم أو المحاكمة (المادة 16 (2)). وكذلك ضمان محاسبة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين على جرائم الفساد على النحو المنصوص عليه في القرار 2/7.



## بشأن سبل الانتصاف في قضايا الفساد

تذكير الدول الأطراف بضرورة اتخاذ تدابير فعالة للتصدي للأثار الناجمة عن الفساد وضمان تعويض الضحايا -أفراداً وجماعات- (المواد 32 و 34 و 35 و 53 و 57 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، وتشجيع الدول الأطراف على المضي قدماً في الجهود المبذولة لتحديد هوية الضحايا وتعويضهم في قضايا الفساد ومشاركة أفضل الممارسات وتشجيعها.

## بشأن استرداد الأصول

حث الدول الأطراف على اتخاذ خطوات عاجلة نحو الوفاء بالالتزام بهدف التنمية المستدامة 16-4 بغية تعزيز استرداد الأصول وإعادتها بحلول عام 2030، لا سيما من خلال تعزيز تبادل المعلومات بشكل استباقي وفي الوقت المناسب، وملاحقة المسؤولين الفاسدين محلياً وإنفاذ القوانين المناسبة باستمرار (المواد 53 و 56). وينبغي أن تنظر الدول الأطراف في قبول مطالبات المصلحة العامة فيما يتعلق باسترداد عائدات الفساد المنقولة إلى الخارج (المادتان 13 و 35).

دعوة الدول الأطراف إلى سن وتنفيذ قوانين شاملة تنص على مصادرة أي أصل تم التحصل عليه جراء ارتكاب جريمة مقررة بموجب الاتفاقية أو بُني على ذلك، والسماح بالتجميد السريع للأصول المشتبه في كونها مكتسبة من ارتكاب هذه الجرائم (المادة 3).

دعوة الدول الأطراف إلى ضمان كون الأصول المعادة عملاً بالاتفاقية سيتم استخدامها وإعادتها وإدارتها وفقاً لمبادئ التصرف في الأصول المسروقة المصادرة في قضايا الفساد ونقلها (مبادئ GFAR "المنتدى العالمي لاسترداد الأصول")، وعلى نحو يفضي إلى المساهمة في التنمية المستدامة وتعويض الأضرار التي لحقت بالمجتمع والضحايا. كذلك، حث الدول الأطراف على وضع وتطبيق مبادئ توجيهية بشأن أفضل الممارسات في إدارة الأصول وإعادتها، والتي تشمل تلك المبادئ.

وتمشيًا مع القرار 3/6 الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف، يُرجى دعوة الدول الأطراف إلى جمع ونشر بيانات عامة على المستوى الوطني بشكل سنوي بشأن حجم الأصول التي تم الاستيلاء عليها أو مصادرتها أو إعادتها، بالإضافة إلى إمداد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أو STAR بمعلومات حديثة عن أي إجراءات داخل المحاكم أو خارجها تتضمن عائدات فساد عبر الحدود (المادة 9).

## بشأن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة 2021 حول الفساد

ضمان أكبر مشاركة ممكنة لمنظمات المجتمع المدني في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة -تمشيًا مع المبادئ التوجيهية لمفوضية حقوق الإنسان لعام 2018 بشأن الحق في المشاركة في الشؤون العامة (التي اعتمدها مجلس حقوق

الإنسان في القرار 11/39 بإجماع الآراء) - بما في ذلك منح منظمات المجتمع المدني الحق في مراقبة الاجتماعات التحضيرية ومن خلال وضع إجراءات تتيح لها المساهمة في الوثيقة الختامية للجلسة.

منع اشتغال قواعد القرارات على مبدأ عدم الاعتراض الذي قد يتيح للدول الأطراف الاعتراض على مشاركة منظمات المجتمع المدني - التي ليست لها وضع استشاري داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة - في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة، دون الإفصاح عن البلد المعارض وأسباب الاعتراض، ودون منح أي فرصة لمنظمات المجتمع المدني المتضررة بالرد. وبدلاً من ذلك، تتم الموافقة على آلية تتفق مع قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة 31/1996، الذي ينظم مشاركة المجتمع المدني على مستوى الجمعية العامة. ويجب أن يشترط هذا الإجراء أن تكون أي اعتراضات من الدول الأطراف على منظمات معينة مكتوبة مع تفصيل الاعتراض وقبل وقت طويل من موعد انعقاد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة (أو الاجتماع التحضيري)، وأن يتم نشر الاعتراضات وجميع المواد ذات الصلة، مع إتاحة فرصة لمنظمات المجتمع المدني للرد، وبعد ذلك يكون هناك قرار عام بشأن الاستبعاد.

6 ديسمبر 2019